

El cambio político en el México pos-neoliberal

Political change in post-neoliberal Mexico

Jaime Espejel Mena¹

Miguel Ángel Sánchez Ramos

Recibido: 21 de marzo de 2023

Aceptado: 16 de mayo de 2023

Resumen

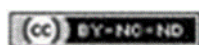
¿Qué sucede con el cambio político dirigido por un gobierno populista? El artículo analiza el cambio político e institucional en la administración pública y presenta el caso mexicano en el contexto de la cuarta transformación. El análisis de las decisiones políticas se confronta con los aportes teóricos sobre el cambio político e institucional, recuperando que la alternancia no es suficiente para el cambio político e institucional. Se concluye planteando que los populistas en el gobierno apuntan a estructuras, recursos, personal, normas y relaciones de rendición de cuentas. Los ejemplos sugieren que las políticas de administración pública populistas pueden tener un profundo impacto en la formulación de políticas y la democracia, lo que subraya la necesidad de una agenda de investigación más amplia en esta área temática.

Palabras clave: cambio político, cambio institucional, política, gobierno, régimen.

Abstract

What about political change led by a populist government? The article analyzes the political and institutional change in public administration and presents the Mexican case in the context of the fourth transformation. The analysis of political decisions is confronted with theoretical contributions on political and institutional change, recovering that alternation is not enough for political and institutional change. We conclude by saying that populists in government point to structures, resources, personnel, norms and accountability relations. Examples suggest that populist public administration policies can have a profound impact on policy-making and democracy, underlining the need for a more focused research agenda in this thematic area.

Keywords: political change, institutional change, politics, government, regime.



Espacios
Públicos

ISSN: 2954-4750, año 24, núm. 60, enero-marzo 2023, pp. 143-157

¹Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex.

Introducción

Los derroteros del Estado mexicano, en la denominada Cuarta Transformación (4T), apuntan a una revisión profunda del Estado y sus instituciones, con el objetivo de garantizar la certidumbre en el funcionamiento del gobierno y la distribución de recursos. Esto implica la necesidad de acotar la discrecionalidad del poder y revisar los alcances obtenidos hasta el momento (Dussauge, 2021).

El arreglo institucional que se propone la 4T busca consolidar una democracia de calidad y un Estado de derecho. Para lograrlo, se necesitan reformas políticas, que abarcan una serie de aspectos clave. En primer lugar, es necesario mejorar el sistema electoral y de partidos, lo que podría incluir la introducción de nuevas medidas para garantizar la representatividad y la transparencia en el proceso electoral. En segundo lugar, se debe incrementar la información y la transparencia, lo que podría implicar la implementación de nuevas leyes y políticas que garanticen la libertad de prensa y la divulgación de información relevante para la ciudadanía. En tercer lugar, se requiere especializar y diferenciar la función pública, lo que podría incluir la creación de una nueva agencia encargada de la selección y evaluación del personal público, con el objetivo de garantizar la idoneidad y la competencia de los funcionarios.

En cuarto lugar, se necesita facilitar la participación política de todos los grupos de interés e ideológicos, especialmente de las comunidades indígenas y las mujeres, lo que podría implicar la creación de nuevos mecanismos de consulta y participación ciudadana. En quinto lugar, es fundamental continuar y racionalizar el proceso de descentralización político-administrativa, para garantizar una mejor distribución del poder y de los recursos en todo el territorio. En sexto lugar, se necesita erradicar el clientelismo y el patrimonialismo político de los aparatos administrativos, lo que podría lograrse mediante la consolidación de un servicio profesional de carrera para los funcionarios públicos. En séptimo lugar, es necesario garantizar la efectiva división de poderes y la sumisión de todos ellos y de los ciudadanos a la ley, y en particular, erradicar la arbitrariedad y reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los poderes públicos.

En resumen, el nuevo arreglo institucional propuesto busca establecer un marco jurídico y político que garantice la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, así como el respeto a los derechos humanos y a la ley. De esta manera, se pretende superar definitivamente el clientelismo político, la corrupción y

avanzar hacia una democracia de calidad y Estado de derecho.

En los últimos años, ha habido preocupaciones sobre el retroceso democrático en México en el contexto del cambio político hacia la izquierda y el progresismo. Algunos argumentan que el gobierno de López Obrador ha utilizado tácticas autoritarias para consolidar su poder y limitar la participación política y la libertad de expresión.

Entre las preocupaciones específicas se encuentran el uso del poder judicial para perseguir a oponentes políticos, el ataque continuo a los órganos reguladores y la crítica constante y desconfianza a los órganos constitucionales autónomos, y la creciente militarización de la seguridad pública. También hay preocupación sobre la erosión de la libertad de prensa y el uso de la retórica polarizante que ha contribuido a la creciente división política y social en el país.

La polarización es característico del populismo (Hermet, 2003), hay una intencionalidad de señalar a una élite y privilegiar al pueblo olvidado. La retórica es fundamental en el populismo (Cerrut, 2009); en el caso mexicano, la base del discurso son los más necesitados, el pueblo, ese que ha sido saqueado y no tomado en cuenta. Combatir la corrupción que tanto daño le ha hecho al pueblo es el principal discurso que sostiene el gobierno de la 4T. La polarización, entonces, genera reacciones y posicionamientos a favor y en contra, según la situación en la que se encuentre el sujeto o actor, individual o colectivo. El populismo se resume, como lo señala Gómez Vilchis (2022), en tres dimensiones básicas: la actitud antielitista, el impulso de políticas dirigidas a los más vulnerables y la figura carismática de un líder. Estas tres características las cumple la 4T.

En el presente artículo se asume como supuesto que el cambio político y la alternancia electoral son necesarios para generar un cambio institucional, pero, por sí solos, no son suficientes para garantizar una mejora en la calidad democrática y en la lucha contra la corrupción. Es menester que exista una voluntad política real de cambio y que se implementen reformas institucionales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, es fundamental que se establezcan medidas efectivas de control y sanción para aquellos que incurran en prácticas corruptas o antidemocráticas, y que se fomente una cultura de integridad y ética pública en todos los niveles de gobierno y de la sociedad en general como lo afirman Norris e Inglehart (2019).

Por lo anterior, el objetivo es disertar sobre las bases escritivas del cambio político e institucional y la forma en cómo se han abordado a partir del gobierno de la 4T en México, que es calificado como populista por su énfasis en los más necesitados. Para dar satisfacción al supuesto y al objetivo, la exposición se ha dividido además de esta introducción en cinco apartados, en el primero y en segundo se aborda la explicación teórica del cambio político e institucional, necesaria para la comprensión de la realidad. En tercer y cuarto momentos, se presentan los grandes matices de contexto de la 4T a la vez que se desarrolla la discusión de los elementos resultantes confrontados con la literatura especializada.

Las conclusiones, que integran el quinto apartado, sugieren que los gobernantes en México tienen la intención de implementar reformas administrativas para lograr transformaciones en la gestión gubernamental, pero que a menudo se quedan cortos en la implementación de las reformas necesarias para lograr un cambio significativo.

El cambio político

Los cambios políticos responden a una variedad de factores, como el activismo ciudadano, los movimientos sociales, la presión internacional, los cambios en las condiciones económicas y sociales, y otros factores. En respuesta los gobiernos han implementado reformas políticas para encauzar la pluralidad y la participación política con la creación de nuevos partidos políticos, reforma electoral, promoción de la participación ciudadana en los procesos políticos, la descentralización del poder político y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos gubernamentales (Dahl, 2002).

Cuando las instituciones interrumpen las restricciones al proceso de decisión, la vida política puede carecer de estabilidad y certidumbre. Las instituciones son fundamentales en cualquier sistema político, ya que establecen las reglas y normas que deben seguirse para tomar decisiones y resolver conflictos. Cuando estas normas y valores se han institucionalizado, se puede producir una mayor confianza y certidumbre.

En este sentido, las instituciones cumplen una función crucial en la estabilización del sistema político. Cuando las personas confían en que las reglas y normas establecidas son justas y efectivas, se sienten más seguras y confiadas en su capacidad para participar en la vida política. Esto, a su vez, ayuda a fortalecer la gobernanza y

la estabilidad política en general. Sin embargo, es importante destacar que las instituciones también pueden ser vulnerables a la corrupción y al abuso de poder. Si las reglas y normas facilitan la corrupción, o no son lo suficientemente apoyadas con instituciones que las garanticen, o se utilizan para beneficiar a ciertos grupos en detrimento de otros, la confianza en el sistema político se puede erosionar rápidamente. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones sean diseñadas y supervisadas de manera adecuada para evitar estos riesgos y asegurar que las reglas y normas sean justas y efectivas para todos (O'Donnell y Schmitter, 2021).

Por otro lado, el servicio profesional de carrera busca garantizar que los servidores públicos sean seleccionados y evaluados en función de su capacidad, experiencia y mérito, y no en función de criterios políticos o de favoritismo. Esto contribuye a mejorar la calidad de la administración pública y a reducir la corrupción.

Sin embargo, es importante destacar que la creación de estas instituciones no es suficiente para garantizar la transformación efectiva de la vida política y la reducción de la corrupción. Es necesario que estas instituciones sean diseñadas y supervisadas adecuadamente, y que cuenten con los recursos y el apoyo político necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Además, es importante que la ciudadanía esté involucrada en la supervisión y evaluación del desempeño de estas instituciones, y que se fomente una cultura de rendición de cuentas y transparencia en la vida política. Solo de esta manera se pueden asegurar transformaciones tangibles que reduzcan la corrupción y ofrezcan un trato más igualitario a los ciudadanos.

Una administración pública institucionalizada se correlaciona con desempeño de la democracia y el desarrollo socioeconómico. Una administración pública institucionalizada es aquella que está basada en reglas claras y transparentes, que se rige por principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, y que está diseñada para garantizar la igualdad de trato a todos los ciudadanos, independientemente de su origen, género, orientación política o cualquier otra característica. Una administración pública institucionalizada es esencial para asegurar la implementación efectiva de políticas públicas y para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y eficiente. Entonces, así la administración es clave para prevenir la corrupción y el nepotismo, y para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La modernidad socioeconómica tiene impactos en la cadena económica de producción, consumo y distribución, así como con la satisfacción de necesidades. Esto contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a reducir la pobreza y a promover el desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante destacar que la correlación entre la democracia, la administración pública institucionalizada y la modernidad socioeconómica no es automática ni garantizada. Es necesario que se implementen políticas y programas adecuados para fomentar estas correlaciones y para asegurar que los beneficios de la democracia y la modernidad se distribuyan de manera equitativa entre todos los ciudadanos (Dror, 1999).

El cambio político puede referirse a cualquier transformación que ocurra en el sistema político o en sus componentes. Es importante distinguir entre los tres componentes del sistema político: comunidad política, régimen y autoridad, y cómo estos se desglosan en diferentes ámbitos o niveles. En cuanto a la comunidad política, se pueden distinguir diferentes ámbitos que incluyen ideologías, valores o creencias compartidos por los ciudadanos, personas o grupos activos en la política, y estructuras intermedias como partidos políticos o grupos de interés (Morlino, 1985).

El régimen, por su parte, incluye aspectos como las ideologías, valores o creencias que sustentan el sistema político, las normas o reglas del juego que rigen la toma de decisiones políticas, las estructuras de decisión que permiten la implementación de políticas públicas, y las estructuras de enforcement que garantizan el cumplimiento de las normas y la sanción de las conductas ilegales. Finalmente, en cuanto a las autoridades, se refiere a los titulares de los roles políticos que están encargados de la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas, como el presidente, los ministros, los legisladores, los jueces y otros funcionarios públicos (Morlino, 1985).

Cualquier transformación que ocurra en alguno de estos ámbitos puede ser considerada como un cambio político. Por ejemplo, la adopción de nuevas normas electorales que permitan una mayor participación ciudadana puede ser un cambio político en el ámbito del régimen, mientras que la elección de un nuevo presidente con un enfoque político diferente puede ser un cambio político en el ámbito de las autoridades.

Un cambio sistémico es aquel en el que se transforman todos los componentes del sistema político, es decir, la comunidad política, el régimen y la autoridad. Este tipo de cambio puede ser muy profundo y puede tener

consecuencias importantes para la forma en que funciona el sistema político en su conjunto. Por otro lado, un cambio intrasistémico o componencial se produce cuando se modifica uno o algunos componentes del sistema político, pero no todos. Por ejemplo, un cambio en las normas electorales podría ser considerado un cambio intrasistémico. El cambio intracomponencial o factorial es aquel en el que se modifica uno o algunos de los elementos o factores dentro de los componentes mismos del sistema político. Por ejemplo, un cambio en la ideología de un partido político podría ser considerado un cambio intracomponencial. Finalmente, el cambio intercomponencial o interfactorial se produce cuando se modifica el sistema político debido a las interdependencias recíprocas entre componentes y entre factores. Por ejemplo, un cambio en las normas electorales podría tener un impacto en la forma en que se toman las decisiones en las estructuras de decisión del sistema político (Morlino, 1985; 2005).

El cambio político de las instituciones

Las organizaciones y organismos pueden influir en el cambio institucional y a su vez, ser afectados por él. El cambio institucional puede surgir de manera intencional, por ejemplo, a través de reformas legales y políticas, o de manera no intencional, como resultado de procesos sociales y económicos más amplios. En cualquier caso, el marco institucional en el que operan las organizaciones y organismos tiene un impacto significativo en su capacidad para lograr sus objetivos y adaptarse a los cambios en su entorno. Por lo tanto, es importante entender cómo se relacionan el cambio institucional y el cambio organizacional y cómo pueden impulsarse mutuamente para promover la evolución positiva de las sociedades y organizaciones (North, 1995: 13-42). Es cierto que el cambio institucional no siempre es funcional y que las instituciones pueden leer mal las señales emitidas por la sociedad y responder de manera disfuncional. Empero, las instituciones tienen la capacidad de ajustar su comportamiento a través de un modelo adaptativo, que consiste en analizar los problemas y buscar soluciones de manera oportuna y flexible.

El cambio organizacional, por su parte, puede responder tanto a las consecuencias positivas como negativas del cambio institucional. Por ejemplo, si una institución pública cambia sus reglas y procedimientos para ser más transparente y eficiente, es posible que algunas organizaciones se ajusten y se adapten al nuevo entorno,

mientras que otras puedan verse afectadas negativamente y necesiten modificar su estructura o incluso desaparecer. En general, tanto el cambio institucional como el organizacional son procesos complejos y multifacéticos que involucran diversos factores, y su éxito depende en gran medida de la capacidad de las instituciones y organizaciones para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno (Guy, 2003: 56-69).

Según March y Olsen (1997), la atención organizacional es un recurso escaso y limitado que se compone de tiempo, información y capacidad cognitiva para procesarla. Por lo tanto, en el análisis organizacional es crucial identificar los criterios que regulan su distribución dentro de la organización. Estos criterios pueden ser variados, y pueden incluir factores como la importancia estratégica de las decisiones, el grado de incertidumbre o riesgo asociado con las opciones disponibles, la presión de los grupos de interés externos e internos, entre otros. En este sentido, el estudio de la toma de decisiones organizacionales no solo se enfoca en cómo se toman las decisiones, sino también en cómo se distribuyen los recursos de atención para tomarlas, lo que puede influir significativamente en los resultados y la eficacia de la organización. La atención organizacional es “la habilidad que tienen sus instancias inteligentes de la organización para observar y decidir acerca de los procesos que tienen lugar en las distintas subunidades organizacionales” (Vergara, 1997: 13). March y Olsen (1997) sugieren que la atención de una organización se centra en aquellas áreas que presentan problemas o resultados no satisfactorios, en lugar de centrarse en las áreas que pueden maximizar los resultados. Esto se debe a que la atención organizacional es un recurso escaso y las organizaciones tienden a asignar sus recursos limitados a las áreas que presentan los mayores desafíos o problemas. Además, las organizaciones pueden tener incentivos para mantener ciertas áreas problemáticas porque pueden justificar su existencia y recibir más recursos para abordar esos problemas.

Las rutinas organizacionales son patrones estables de comportamiento que permiten a las organizaciones procesar la información y tomar decisiones de manera eficiente y efectiva. Estas rutinas surgen a través de la repetición y se convierten en formas habituales de resolver problemas y de tomar decisiones. Cuando las rutinas organizacionales son efectivas, permiten a las organizaciones centrar su atención en las áreas que requieren mejora y maximizar los resultados. Sin embargo, cuando las rutinas organizacionales no son efectivas, pueden obstaculizar la capacidad de la organización para adaptarse y mejorar. Por lo tanto, es importante que las organizaciones evalúen

y modifiquen sus rutinas organizacionales de manera regular para asegurarse de que estén alineadas con sus objetivos y necesidades actuales. De esta manera, pueden optimizar su capacidad de atención y mejorar sus resultados. Las rutinas son “...procedimientos, convencionales, papeles, estrategias, formas organizativas y tecnologías en torno a los cuales se construye la actividad política” (March y Olsen, 1997: 68).

Las normas establecen las expectativas de comportamiento y las reglas de juego que rigen la interacción entre los individuos y las unidades de la organización. Estas normas pueden ser formales o informales y están influenciadas por factores externos e internos a la organización, como el entorno económico, político, social y cultural en el que se desenvuelve la institución, así como las experiencias previas y los valores compartidos por los miembros de la organización. Es importante destacar que las normas no son estáticas, sino que pueden evolucionar y cambiar con el tiempo, especialmente cuando se enfrentan a nuevas situaciones y desafíos.

La ambigüedad puede afectar el comportamiento de los individuos y el funcionamiento de las organizaciones. La ambigüedad se refiere a la falta de claridad o certeza sobre ciertos aspectos, como los objetivos organizacionales, las responsabilidades de los roles, las expectativas de desempeño, entre otros. Cuando hay ambigüedad, los individuos pueden interpretar las reglas y normas institucionales de manera diferente, lo que puede llevar a conflictos o a decisiones que no son compatibles con los objetivos organizacionales. Además, la ambigüedad puede generar incertidumbre e inseguridad en los individuos, lo que puede afectar su motivación y compromiso con la organización. Por lo tanto, es importante que las organizaciones se esfuercen en reducir la ambigüedad, por ejemplo, a través de la comunicación clara y efectiva, la definición clara de objetivos y responsabilidades, y el establecimiento de procesos y procedimientos claros.

March y Olsen (1997: 97) argumentaron que los actores en las organizaciones no siempre son actores racionales con preferencias claras y compatibles con la organización. Según estos autores, los actores en las organizaciones suelen estar limitados por la información imperfecta, la incertidumbre y la complejidad de los problemas que enfrentan. Además, los actores en las organizaciones a menudo tienen preferencias vagas, contradictorias y cambiantes que no son fáciles de identificar y satisfacer. Los gerentes y líderes de las organizaciones deben ser conscientes de las limitaciones de los actores individuales y reconocer que el comportamiento organizacional es

el resultado de una compleja interacción entre múltiples actores con diferentes preferencias, intereses y niveles de información. Para lograr la coordinación y el compromiso en las organizaciones, los gerentes deben encontrar formas de alinear las preferencias y objetivos de los actores individuales con los objetivos de la organización y crear incentivos y mecanismos que fomenten la cooperación y la confianza.

El cambio político e institucional en el sistema político mexicano pos-neoliberal y la 4T

El discurso del gobierno de la 4T se centra en establecer distancia con el neoliberalismo aplicado cuando menos en los 30 años anteriores; en consecuencia, alienta el bienestar de los necesitados, de los más pobres, del pueblo que no ha sido beneficiado por esas políticas neoliberales. Enfatiza su interés en la política social que define como política de bienestar; recupera el sentimiento de nacionalismo al establecer como política de acción la producción de energéticos como gasolina, y no ser solo explotadores primarios y exportadores de ese crudo, para convertirse en compradores del energético transformado; se apoya bastante en el ejército para la construcción de obras de impacto (refinería Dos Bocas, el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren maya, por ejemplo), para el control de esquemas de transacción donde se sospechaba que había corrupción; se crea la guardia nacional; y la creación de la Universidad del Bienestar, entre otros programas.

El diseño del contexto institucional de la 4T pretende disminuir la corrupción a través de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Es una iniciativa del gobierno mexicano dentro del marco de la 4T para establecer un conjunto de normas y reglas que promuevan la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. La intención de esta ley es simplificar y estandarizar los procesos de toma de decisiones en las organizaciones gubernamentales, reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia y la responsabilidad (Dussauge, 2021).

Las normas y reglas también deben ser efectivamente implementadas y supervisadas para asegurar su cumplimiento y prevenir el incumplimiento y la corrupción. Por lo tanto, la institucionalización de normas y reglas debe ser acompañada de esfuerzos para mejorar la capacidad y la eficacia de la implementación y supervisión (March y Olsen, 1997). Los ciudadanos deben tener la capacidad de monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones del gobierno y de exigir responsabilidades en caso de incumplimiento (March y Olsen, 1997: 84-85).

Un marco institucional sólido puede contribuir a reducir la corrupción y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. Al establecer normas claras y regulaciones efectivas, se puede garantizar que las instituciones del gobierno operen de manera ética y responsable, y que rindan cuentas ante la sociedad. En última instancia, un marco institucional sólido puede ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad y promover el desarrollo económico y social. “Un orden político y moral, así como una serie de procedimientos operativos estándar de larga duración que reflejan valores, principios y creencias compartidos por la mayor parte de la población. La tarea primordial del Estado es garantizar el orden político y la autonomía de las diversas esferas institucionales de la sociedad” (March y Olsen, 1997: 191).

Según Transparencia Mexicana en su medición realizada en el año 2020, la percepción de la corrupción ubica a México en el lugar 124 de 180 países, lo que favorece el riesgo de la impunidad. Para abordar estos problemas, es necesario fortalecer el marco institucional y promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las áreas del gobierno. También se deben implementar medidas efectivas para prevenir y combatir la corrupción, lo que puede incluir reformas institucionales y cambios en la cultura política. Las reformas impulsadas por la 4T en materia administrativa buscan concentrar poder de decisión, dotar al Estado de mayor ventaja frente al particular en materia de concesiones y contratos, también destaca la lucha contra el fraude fiscal y la evasión impositiva.

Además de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública, las reformas también pueden tener como objetivo aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, reducir la corrupción y mejorar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Para lograr estos objetivos, las reformas pueden incluir cambios en la forma en que se reclutan y se capacitan a los funcionarios públicos, en la manera en que se toman las decisiones, en la forma en que se asignan los recursos y en la forma en que se interactúa con los ciudadanos (March y Olsen, 1997).

Para abordar las variables políticas, económicas y sociales que pueden afectar la implementación de reformas administrativas, es necesario que el gobierno mexicano y los individuos o grupos involucrados en el proceso consideren una serie de estrategias. Algunas de estas estrategias pueden incluir: 1) diálogo y negociación: es importante que se realicen diálogos y negociaciones para

lograr un acuerdo político sobre la necesidad y los objetivos de las reformas administrativas, lo que puede ayudar a lograr un mayor consenso político y reducir la resistencia al cambio; 2) comunicación efectiva: es importante que se comuniquen de manera efectiva los beneficios y las razones de las reformas administrativas para que la sociedad pueda comprender los objetivos y los resultados que se esperan; 3) participación ciudadana: la participación puede ayudar a aumentar el apoyo y la legitimidad de las reformas administrativas, así como a identificar problemas y oportunidades; 4) fortalecimiento institucional: puede aumentar la capacidad del gobierno para implementar reformas administrativas y mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública, y 5) monitoreo y evaluación: el monitoreo y la evaluación pueden ayudar a evaluar el progreso y los resultados de las reformas administrativas, lo que puede ayudar a identificar oportunidades para mejorar el proceso y los resultados (Oszlak, 1979).

Abordar las variables políticas, económicas y sociales es fundamental para la implementación efectiva de reformas administrativas. Al utilizar estrategias como el diálogo y la negociación, la comunicación efectiva, la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional y el monitoreo y evaluación, se puede aumentar el apoyo y la legitimidad de las reformas y lograr una administración pública más eficiente y efectiva (Cunill, 2004). Las reformas a gran escala entendidas como "...esfuerzos sistemáticos y masivos destinados a transformar ciertas características de la organización y funcionamiento del estado a fin de dotarlos $\frac{3}{4}$ como se dice tradicionalmente $\frac{3}{4}$ de mayor eficiencia y eficacia. Durante la mayor parte del siglo fueron conocidas como 'reformas administrativas'" (Oszlak, 1999: 183).

Es cierto que en México se han promovido cambios administrativos y organizacionales en diversas ocasiones, y en algunos casos estos cambios han sido bien aceptados por la sociedad. Sin embargo, también es importante mencionar que en ocasiones estos cambios han sido más bien simbólicos y no han logrado generar transformaciones significativas en la burocracia y la administración pública (Escalante, 1992). Además, en algunos casos, los cambios administrativos han sido utilizados por los gobiernos como herramientas para mantener el poder y la estabilidad política, en lugar de ser una verdadera estrategia para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. Por lo tanto, es necesario evaluar cuidadosamente los cambios administrativos propuestos y su impacto potencial antes de implementarlos, para asegurarse de que sean efectivos y beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Es importante que los líderes del gobierno trabajen para

recuperar la confianza de la población y fomentar un diálogo abierto y constructivo con la sociedad (Pietschmann, 1996: 34).

En México se han realizado esfuerzos para ampliar la competencia electoral y fortalecer las instituciones que vigilan la transparencia de los procesos electorales. En los últimos años, México ha experimentado una transformación significativa en su sistema político, y este cambio se ha reflejado en la forma en que se llevan a cabo las elecciones y se gestiona la gobernanza en general (Puga, 2021).

Las instituciones juegan un papel clave en la regulación del comportamiento y la interacción entre los individuos, las empresas y el Estado, lo que permite garantizar el respeto de los derechos y la protección de los intereses de la sociedad. Además, las instituciones también son importantes para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por lo tanto, la institucionalidad es un imperativo para todos los Estados, y en el caso de México, la Cuarta Transformación y la reforma del Estado deben estar enfocadas en fortalecer las instituciones para garantizar el desarrollo y la certidumbre en el funcionamiento del gobierno y la sociedad en su conjunto. Solo de esta manera se podrán asegurar los cambios políticos y las reformas institucionales adecuadas y sostenibles (Córdova, 2013). Es cierto que, en países con una débil institucionalidad, un pacto político o un nuevo arreglo institucional pueden ser una alternativa para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo. En estos casos, es común que se presenten errores políticos, económicos y sociales, lo que implica la necesidad de realizar cambios significativos en la forma en que se gobierna el país.

Las instituciones políticas de México han evolucionado considerablemente desde la época del autoritarismo, y han permitido la construcción y consolidación de instituciones que han permitido abordar conflictos, resolver demandas en competencia y distribuir beneficios de manera más justa. Estas instituciones incluyen el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) (Puga, 2021; Canino, 2002; Meyer, 1995).

La creación de la Secretaría de la Función Pública y el servicio profesional de carrera son transformaciones institucionales importantes que pueden contribuir a un cambio político efectivo y a la continuidad de las transformaciones democráticas. La Secretaría de la Función Pública tiene como objetivo principal garantizar la

eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de las funciones públicas. Para lograr esto, la Secretaría lleva a cabo acciones como la auditoría y fiscalización de recursos públicos, la promoción de la ética y la integridad en el servicio público y la implementación de políticas para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.

Esto puede incluir la promoción de la participación ciudadana y la escucha activa de las preocupaciones y demandas de la población. De acuerdo a la “encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental ENCIG-2021”, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), la satisfacción del desempeño del gobierno en México se mantuvo en niveles similares a los observados en años anteriores. En el estudio se observa que el 69.8% de la población nacional confía en la administración pública federal, mientras que solo el 20.6% lo hace en la administración pública municipal. El mismo estudio presenta una disminución en la confianza en las instituciones políticas y sociales, con una tasa de confianza en el gobierno del 39.1% y en el porcentaje de personas que observan a la administración pública como corrupta, con un 86.3%, contra en 87.0% en el año 2019.

Además de que, como ya se mencionó, la eficiencia en los procesos administrativos determina el éxito de un sistema político. El proceso de reforma en la administración pública implica la rutinización que más tarde se transforma en normas y convenciones las cuales conforman la cultura organizacional. Para que una reforma de tal naturaleza sea efectiva debe incluir no solamente un cambio en las estructuras y los procedimientos organizacionales sino en el comportamiento de los administradores orientado hacia el apego a la ley en todo el contexto nacional. En México se observa que de las 32 entidades federativas el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) gobierna en 22, mientras que de los 2471 municipios sólo lo hace en 495 (INE, 2022), la reforma administrativa, dentro de un contexto de cambio político local, representa un reto para su diseño institucional.

La eficiencia en la administración pública es esencial para la calidad de vida de la población, ya que una administración pública ineficiente puede afectar la prestación de servicios esenciales como educación, salud y seguridad. Además, una administración pública ineficiente puede conducir a la falta de confianza en el gobierno y, en última instancia, a la erosión de la legitimidad del gobierno (Guerrero, 1994; Moreno, 1995). Por lo tanto, una reorganización y reforma administrativa bien diseñada y bien

implementada puede ayudar a mejorar la eficiencia en los procesos administrativos, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la confianza en el gobierno. A pesar de los cambios políticos, México sigue enfrentando importantes desafíos en su camino hacia una democracia más plena y participativa. La corrupción y la impunidad siguen siendo problemas graves en el país, y la violencia y la inseguridad son problemas persistentes que afectan a muchos sectores de la sociedad. Además, la falta de confianza en las instituciones públicas y la participación ciudadana limitada siguen siendo obstáculos importantes para el desarrollo de una democracia más sólida en México (Elizondo y Nacif, 2006).

A partir del 1 de diciembre de 2018 se oficializa un cambio político liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México caracterizado, en el discurso por: 1) populismo: López Obrador ha sido identificado como un líder populista, utilizando un discurso en el que se presenta como el defensor de los intereses de la gente desprotegida históricamente frente a las élites políticas y económicas del país; 2) nacionalismo: López Obrador ha mostrado una fuerte inclinación hacia el nacionalismo, promoviendo políticas económicas y comerciales que priorizan el desarrollo interno y la protección de los intereses nacionales; 3) redistribución: El presidente ha enfatizado la necesidad de reducir la desigualdad social y económica en el país, y ha implementado políticas y programas para redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos más pobres; 4) anticorrupción: López Obrador ha liderado una campaña anticorrupción, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones del gobierno y promoviendo la lucha contra la corrupción como una de las principales prioridades de su administración; 5) participación ciudadana: El presidente ha promovido una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno, mediante la implementación de mecanismos de consulta popular y el fomento de la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas, y 6) conservadurismo social: López Obrador ha mostrado una posición conservadora en cuestiones sociales, como la legalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que ha generado críticas de algunos sectores de la sociedad.

El cambio político y el contexto democrático en el México

¿Qué sucede con la administración pública cuando los populistas son elegidos para el gobierno? Tal como se entiende aquí, el retroceso democrático significa el

debilitamiento o eliminación del liderazgo por el Estado de cualquiera de las instituciones políticas que sustentan una democracia existente, la reducción del pluralismo político, y el populismo, que pretende hablar en nombre de un solo pueblo, es un posible impulsor de tales desarrollos (Bermeo, 2022; 2020). La administración pública es una institución pluralista en las democracias modernas, los populistas la moldean y dirigen a sus necesidades ideológicas. Estas necesidades pueden diferir con el Estado, que en combinación con las diferencias en la solidez de los órdenes administrativos generan objetivos específicos en la política de administración pública populista: capturar, dismantelar, sabotear, o reformar la burocracia estatal (Cansino y Alarcón, 1994).

El cambio político en México, particularmente bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un impacto significativo en el contexto democrático del país. Una de las principales características del cambio político ha sido la lucha contra la corrupción y la impunidad en la administración pública. Desde su llegada al poder, López Obrador ha promovido una serie de iniciativas y reformas para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en la gestión pública. Otra característica importante del cambio político ha sido el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. López Obrador ha promovido la consulta popular y ha creado mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de políticas públicas. Además, el gobierno ha implementado políticas para mejorar la calidad de vida de la población, incluyendo programas sociales para personas de bajos ingresos y la mejora de los servicios públicos.

Andrés Manuel López Obrador, desde que asumió el cargo como presidente, ha implementado políticas que buscan reducir la desigualdad social y económica en el país, y ha adoptado un enfoque más nacionalista y anti-imperialista en sus relaciones internacionales.

Algunas de las políticas que ha implementado incluyen programas de apoyo económico directo a los más necesitados, como el programa de pensión para adultos mayores y la entrega de becas para estudiantes de bajos recursos. También ha llevado a cabo proyectos de infraestructura a nivel nacional, como la construcción del Tren Maya en el sureste del país y la rehabilitación de refinerías de petróleo.

Además, ha buscado fortalecer el mercado interno y fomentar la inversión en sectores estratégicos, como la industria energética y la producción agrícola, para reducir la dependencia del país de las importaciones y mejorar su

capacidad para generar empleos y riqueza internamente.

Sin embargo, la orientación política hacia la izquierda y el progresismo en México también ha enfrentado críticas y oposición de sectores conservadores y empresariales que se benefician del modelo neoliberal y ven las políticas redistributivas como una amenaza a sus intereses. También ha habido preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa bajo el gobierno de López Obrador. México está experimentando un cambio en su orientación política hacia la izquierda y el progresismo, lo que se ha reflejado en la elección de un presidente de izquierda y en las políticas que ha implementado desde entonces. A pesar de las críticas y oposición que enfrenta, el gobierno de López Obrador ha mantenido su compromiso de reducir la desigualdad y fortalecer el mercado interno del país (Dussauge, 2021).

El achicamiento del aparato estatal bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha significado una modificación en las relaciones tradicionales de poder en México. El gobierno ha buscado reducir el tamaño de la burocracia y eliminar puestos innecesarios, lo que ha llevado al incremento de recursos públicos disponibles y a la necesidad de repartirlos de manera más eficiente y transparente. Esto ha implicado una reconfiguración de las relaciones de poder entre el gobierno y los distintos actores políticos, incluyendo partidos políticos, grupos de interés y líderes comunitarios. La disminución de recursos disponibles ha hecho que la lealtad política y el apoyo electoral ya no sean tan efectivos para obtener beneficios, lo que ha llevado a una reevaluación de las estrategias políticas y a la búsqueda de nuevas formas de influencia.

Además, el achicamiento del aparato estatal también ha llevado a la necesidad de mejorar la eficiencia en la administración pública, lo que ha implicado una mayor profesionalización y una mayor exigencia de rendición de cuentas. Esto ha tenido un impacto en la forma en que se toman las decisiones y en la relación entre el gobierno y la sociedad civil, ya que ha aumentado la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones. En general, el achicamiento del aparato estatal ha significado una transformación importante en las relaciones de poder en México, lo que ha llevado a una reconfiguración del panorama político y a una mayor atención a la eficiencia y transparencia en la gestión pública.

La 4T para Roger Bartra (2021), ha sido utilizada para referirse a un conjunto de ideas y acciones que buscan establecer un nuevo modelo de gobierno y de sociedad en México. Algunas de las medidas que ha impulsado la

4T incluyen la austeridad en el gasto público, la eliminación de privilegios para los funcionarios públicos, la reducción de los salarios de los altos funcionarios, la cancelación de proyectos considerados como elitistas o poco útiles para la población, la creación de programas sociales para los sectores más vulnerables, y la promoción de la democracia participativa a través de la consulta popular y la rendición de cuentas. A pesar de que la 4T ha generado críticas y controversias, también ha logrado un importante respaldo popular y ha significado un cambio significativo en la política y la sociedad mexicana (Dussauge, 2021).

En el cambio político promovido por la 4T en México, se ha identificado en varios componentes importantes, que han llevado a cambios significativos en la administración pública, en el cuadro No. 1, planteamos algunos:

Cuadro No. 1
Cambio político y acciones en la administración pública desde la 4T

Cambio político	Cambios en la administración pública
Comunidad política	-La esperanza de México. -Juntos hacemos historia. -Poner en venta el avión presidencial y la flotilla de aeronaves. -Cuarta transformación. -Austeridad Republicana. -Programa Sembrando Vida, Beca para el Bienestar Benito Juárez, - Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. -Pérdida de apoyo gubernamental de 5 mil Organizaciones de la Sociedad Civil.
Régimen	-Guardia Nacional. -Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. -55 artículos reformados a la Constitución política. -Delegaciones de Programas para el Desarrollo. -Banco del Bienestar. -Tren Maya. -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. -Refinería Dos Bocas.
Autoridad	-Presidencia de la República. -Diputados 203. -Senadores 60. -Gubernaturas 22. -Presidencias municipales 495. -Diputados locales 413.

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México (2023).

Para el gobierno de López Obrador en México, la reforma administrativa es vista como una herramienta clave para hacer transparentes los procesos por los cuales se deciden, administran y reparten los beneficios de las políticas públicas. El gobierno ha afirmado que la reforma administrativa busca modernizar y mejorar la eficacia y la transparencia en el funcionamiento del gobierno, reducir la burocracia y mejorar la atención al ciudadano. En particular, el gobierno de López Obrador ha enfatizado la necesidad de mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos para los ciudadanos, y la reforma administrativa se ve como una manera de lograr esto. La reforma también busca fortalecer la integridad y la ética en la función pública, y combatir la corrupción y el nepotismo.

Además, el gobierno ha enfatizado que la reforma administrativa es importante para mejorar la relación del gobierno con los ciudadanos, ya que los servicios públicos son un espacio primordial de interacción entre el gobierno y la sociedad. La reforma busca promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y hacer que los servicios públicos sean más accesibles, eficientes y efectivos. La reforma administrativa es vista por el gobierno de López Obrador en México como una herramienta clave para mejorar la eficacia y la transparencia en el funcionamiento del gobierno, fortalecer la integridad y la ética en la función pública, y mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos para los ciudadanos. También se ve como una manera de fortalecer la relación del gobierno con la sociedad y promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

A manera de corolario en torno a la pregunta ¿Qué sucede con el cambio político dirigido por un gobierno populista?, es elocuente la conclusión que Gómez Vilchis (2022) ofrece en su estudio sobre el perfil del populismo del gobierno de la 4T, consistente en que los apoyos a la 4T provienen de los votantes que consideran muy bueno el manejo de la economía por parte de AMLO, mismos que critican a los medios y los jueces; que los que cuentan con menor nivel educativo apoyan al presidente. El mismo Gómez Vilchis (2022) reconoce que no sólo se trata de emociones y pasiones, sino que el gobierno populista también ejerce cálculo estratégico para motivar la racionalidad del elector. De esta manera, se puede anticipar que el gobierno populista promueve el cambio político que le es necesario desde la triada que lo sostiene: marginar la élite de poder anterior, impulsar políticas para los más necesitados y fomentar un liderazgo carismático que convoque masas.

Conclusiones

La victoria electoral de López Obrador en 2018, ha promovido un discurso de cambio político y progresismo, pero su capacidad para implementar estas capacidades administrativas e institucionales sigue siendo objeto de debate. Es importante señalar que la construcción de un sistema democrático es un proceso continuo y complejo que no se logra simplemente a través de una elección o un cambio de gobierno. Requiere la implementación de reformas institucionales a largo plazo, el fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana, y la lucha contra la corrupción y la impunidad. En el caso de México, se necesitan esfuerzos sostenidos para fortalecer la independencia del poder judicial, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y garantizar la protección de los derechos humanos. Estos son solo algunos de los aspectos que deben abordarse para fortalecer la democracia en el país.

La alternancia electoral no garantiza automáticamente un cambio político democrático. Es necesario un cambio en el contexto institucional, que incluye la implementación de capacidades administrativas e institucionales que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos. En el caso de México, estos son desafíos continuos que requieren esfuerzos sostenidos para fortalecer la democracia en el país.

La implementación de capacidades administrativas e institucionales es esencial para construir un sistema democrático sólido. Esto incluye la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, la independencia del poder judicial, la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana. Todos estos aspectos son clave para el fortalecimiento de la democracia en México y deben ser abordados de manera sostenida y continua. La promoción de una cultura democrática también es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en México. Esto implica la educación en valores democráticos desde una edad temprana y la promoción de una sociedad civil activa y comprometida con la participación ciudadana. Solo a través de un compromiso sostenido y un esfuerzo continuo por parte de todos los actores sociales y políticos en México, se pueden alcanzar avances significativos en el fortalecimiento de la democracia en el país.

Además, es importante que las transformaciones de la administración pública se realicen de manera participativa e inclusiva, involucrando a todas las partes interesadas,

incluyendo a la sociedad civil y a los grupos más vulnerables de la población. Esto fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, y aumenta la probabilidad de que las políticas y programas sean sostenibles y efectivos.

Un pacto político o un nuevo arreglo institucional pueden ser útiles para establecer una base sólida para el desarrollo del país, al proporcionar una hoja de ruta clara y establecer las bases para la cooperación entre los diferentes actores políticos. Esto puede ser especialmente importante en países donde hay una falta de confianza en las instituciones existentes o donde las instituciones están debilitadas. Al establecer un pacto político o un nuevo arreglo institucional, es posible establecer una visión compartida para el desarrollo del país, lo que puede ayudar a orientar las políticas y las acciones hacia objetivos claros y a establecer un marco de referencia para la toma de decisiones. Esto puede ayudar a garantizar la estabilidad política y económica, lo que a su vez puede fomentar la inversión y el crecimiento. En países con una débil institucionalidad, un pacto político o un nuevo arreglo institucional pueden ser una alternativa para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo. Al establecer una visión compartida y establecer las bases para la cooperación entre los diferentes actores políticos, se pueden establecer políticas y acciones que permitan alcanzar objetivos claros y fomentar el crecimiento y la estabilidad.

Es importante destacar que el cambio político por sí mismo no es suficiente para lograr esta transformación, sino que es necesario también llevar a cabo una reforma de las organizaciones públicas y de la administración pública en México. Estas reformas deben estar enfocadas en garantizar el desarrollo y la certidumbre de las instituciones, lo que implica una revisión de la forma de gobierno y del régimen administrativo (Calvin y Velasco, 2023).

En este sentido, es necesario garantizar un acceso justo y equitativo a la función pública, así como una distribución justa y transparente de los recursos públicos. La revisión de los alcances obtenidos hasta el momento en estas áreas es crucial para asegurar que las reformas estén teniendo el impacto deseado (Prud'homme, 2014). Es cierto que el cambio político y la reforma del Estado en México no se justifican por sí mismos, sino que deben estar enfocados en garantizar el desarrollo y la certidumbre de las instituciones. La institucionalidad es un imperativo irrenunciable para todos los Estados, ya que las instituciones son fundamentales para garantizar la

estabilidad y el funcionamiento adecuado del gobierno y la sociedad.

Además, la transformación hacia una economía institucional también implica la creación de un marco regulatorio que promueva la competencia y el acceso a los mercados, así como la eliminación de barreras para la entrada de nuevos competidores. También es importante promover la innovación y el emprendimiento, y fomentar la inversión en investigación y desarrollo. En este sentido, es necesario fortalecer las instituciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, como los organismos reguladores independientes y las agencias de supervisión. También se deben fortalecer los sistemas de control interno y externo de las empresas y las instituciones públicas.

Otra área clave para la transformación hacia una economía institucional es la educación y la formación de capital humano. Es necesario fomentar la educación y la capacitación de alta calidad, para que las personas puedan adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para adaptarse a un entorno económico cada vez más complejo y dinámico.

Para lograr una mayor cohesión social y equidad, es necesario implementar políticas y programas que luchen contra la marginación y la pobreza. También es fundamental garantizar servicios sociales básicos, como el acceso al agua, la atención médica, la educación y la seguridad social. Para lograrlo, es importante replantear la vieja institucionalidad de las burocracias centralizadas, que han demostrado ser incapaces de garantizar la universalidad de los servicios. En cambio, es necesario transferir recursos y responsabilidades a las administraciones descentralizadas, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil según corresponda.

Para lograr una mayor eficacia en la implementación de estas políticas y programas, los gerentes de lo social deben ser competentes en diseñar marcos reguladores y construir y gerenciar redes interorganizacionales. Esta competencia puede ser clave para garantizar el éxito en la lucha contra la marginación y la pobreza y para garantizar el acceso universal a los servicios sociales básicos.

Otro factor importante a considerar es la capacidad de los servidores públicos para implementar las políticas y programas de manera efectiva. Esto incluye la necesidad de contar con una fuerza laboral competente, bien capacitada y motivada, y con sistemas de incentivos y evaluación del desempeño adecuados. La transformación de la administración pública requiere una consideración cuidadosa y estratégica de una amplia gama de factores, incluyendo aspectos económicos, sociales y políticos.

Es importante que estas transformaciones se realicen de manera participativa e inclusiva, involucrando a todas las partes interesadas, y que se cuente con una fuerza laboral competente y motivada para implementar las políticas y programas de manera efectiva.

Además, la implementación de reformas institucionales a largo plazo es esencial para consolidar el cambio político y transformarlo en un cambio institucional duradero. Estas reformas deben incluir la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, la fortaleza y la independencia del poder judicial, el fortalecimiento de los mecanismos de control y sanción, y la promoción de la cultura de integridad en el sector público. También es importante fomentar la participación ciudadana y la colaboración con la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la mejora de la administración pública.

En resumen, aunque el cambio político es necesario para abordar la corrupción, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la administración pública, no es suficiente por sí solo. Es necesario un cambio institucional más profundo que aborde las causas subyacentes de estos problemas y que implique reformas institucionales a largo plazo. Además, la participación ciudadana y la colaboración con la sociedad civil son fundamentales para consolidar el cambio institucional y lograr una administración pública más eficiente, transparente e íntegra.

Cuando un gobierno populista es elegido, puede haber un impacto significativo en el cambio político e institucional en la administración pública. En algunos casos, los gobiernos populistas han buscado realizar una agenda de reforma antipluralista que socava las instituciones democráticas y debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la separación de poderes. En el caso de México, algunos críticos del gobierno de López Obrador argumentan que su gobierno ha buscado erosionar la independencia del poder judicial, reducir la transparencia y la rendición de cuentas, y centralizar el poder en la presidencia. Además, el gobierno ha sido criticado por sus políticas económicas y por la falta de atención a ciertos temas, como la violencia contra las mujeres y la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (transgénero, transexuales y travestis) (LGBT).

Es importante destacar que, si bien algunos gobiernos populistas pueden tener impactos negativos en la democracia y en la administración pública, no todos los gobiernos populistas son iguales y sus impactos pueden variar según el contexto y las políticas que implementen. Además, es importante tener en cuenta que los gobiernos populistas pueden surgir en respuesta a la falta de

atención de los gobiernos anteriores a las necesidades y demandas de la sociedad, y que su elección puede ser vista como una forma de cambio político por parte de una porción de la población. En resumen, cuando los populistas son elegidos para el gobierno, puede haber impactos significativos en el cambio político e institucional en la administración pública. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los impactos pueden variar según el contexto y las políticas que implementen, y que su elección puede ser vista como una forma de cambio político por parte de una porción de la población.

Referencias

- Ackerman, John., Ramírez Gallegos, Rene y Ramírez Zaragoza, Miguel. (2021). Introducción: crisis pandémica y transformación social. ¿Nueva etapa capitalista o inicio de una era posneoliberal? En J. Ackerman (et. al.), *Pos-COVID/ pos-neoliberalismo* (14-42). México: Siglo XXI Editores. Recuperado de <https://www.amazon.com.mx>
- Bartra, R. (2021). *Regreso a la jaula*. México: Debate.
- Bermeo, N. (2020). *Ordinary people in extraordinary times*. New Jersey: Princeton University Press.
- Bermeo, N. (Noviembre de 2022). On Democratic Backsliding. On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, Volume 27, Number 1, pp. 5-19. Recuperado de: <https://muse.jhu.edu/article/607612>
- Calvin, C. y Velasco, J. (Marzo de 2023), Las ideas y el proceso de conformación de las políticas públicas: una revisión de la literatura. *Política y gobierno*, Vol. IV, (1), pp. 169-188. Recuperado de: <http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/1994>
- Cansino, C. (2002). *Conceptos y categorías del cambio político*. México: Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América.
- Cansino, C. (1995). *Construir la democracia. Límites y perspectivas de la transición en México*. México: Miguel Ángel Porrúa-CIDE.
- Cansino, C. y Alarcón, V. (1994). *América Latina: ¿Renacimiento o decadencia?* México: FLACSO-CIDE.
- Cansino, C. y Covarrubias, I. (2007). *Por una democracia de calidad. México después de la 4 transición*. México: CEPACOM-Educación y Cultura.
- Cerrut Guldber, H. (2009). *Populismo*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. Disponible en línea https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/469trabajo.pdf Córdoba, A. (2013). *La formación del poder político en México*. México: Era.
- Cunill, N. (2004). La democratización de la administración pública. Los mitos a vencer. En L. Bresser Pereira (et. al.), *Política y gestión pública* (43-90). México: Fondo de Cultura Económica.
- Dahl, R. (2002). *La poliarquía. Participación y oposición*. Madrid: Tecnos.
- Dror, Y. (1999). *La capacidad de gobernar*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Dussauge, M. (2021). “Doublespeak populism” and public administration: the case of Mexico. En M. Bauer., G. Peters., J. Pierre., K. Yesilkagit, and S. Becker, (Ed.), *Democratic Backsliding and public administration*. (178-198). New York: Cambridge University Press.
- Elizondo, C. y Nacif, B. (2006). La lógica del cambio político en México. En C. Elizondo y B. Nacif (Comps.), *Lecturas sobre el cambio político en México* (7-38). México: Fondo de Cultura Económica.
- Escalante, F. (1992). *Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana*. México: El Colegio de México.
- Gómez Vilchis, R. R (2022). ¿Populismo o lealtad racional hacia el presidente Andrés Manuel Obrador (AMLO)? (El perfil del partidario de la 4T y las elecciones intermedias 2021), *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 17(32), 77-95 pp.
- Guerrero, J. (1998). *Un estudio de caso de la reforma administrativa en México: los dilemas de la instauración de un servicio civil a nivel federal*, [Documento de Trabajo]. México: CIDE.
- Guerrero, O. (1994). *Las raíces borbónicas del Estado mexicano*. México: UNAM.
- Gobierno de México (2023). *Cuarto informe de gobierno 2021-2022*. <https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/4to-INFORME-DE-GOBIERNO-PRESIDENTE-AMLO-01092022.pdf>
- Hermet, G. El Populismo como concepto. *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, núm. 1, 2003, pp. 5- 18 Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile
- IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral) (2023). *El estado de la democracia en el mundo 2022*. Estocolmo: IDEA

- INE (Instituto Nacional Electoral) (2022). *Partidos políticos nacionales*, INE, disponible en <https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/>
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2022). *Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental ENCIG – 2021*, INEGI, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2021/doc/encig2021_principales_resultados.pdf
- Linz, J. (1990). *La quiebra de las democracias*. México: Alianza-Consejo Nacional para la Cultura y la Artes.
- March, J. y Olsen, J. (1997). *El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa de la política*.
- México: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública-FCE.
- March, J. y Herber, S. (1969). *Teoría de la organización*. Madrid: Ariel.
- Metcalf, L. (1999). La gestión pública: de la imitación a la innovación. En C. Marrodán (Ed.), *¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado* (47-68). Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Meyer, L. (1995). *Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano*. México: Océano.
- Molinar, J. (1993). *El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México*. México: Cal y Arena.
- Moreno, R. (1995). *La Administración territorial en México, antecedentes históricos*. México: UAEM-IAPEM.
- Morlino, L. (1985). *Como cambian los regímenes políticos*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Morlino, L. (2005). *Democracias y democratizaciones*. México: CEPCOM.
- Norris, P. and Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash. Trump, Brexit, and authoritarian populismo*. New York: Cambridge University Press.
- North, Douglass C. (1995). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- O'Donnell, G. y Schmitter P. (2021). *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*. Buenos Aires: Prometeo.
- Oszlak, O. (1999). De menor a mejor. El desafío de la segunda reforma del Estado. *Revista nueva sociedad*, (160), 1-17.
- Oszlak, O. (1979). La burocracia estatal en América Latina: Especificidad substantiva e histórica. *Revista internacional de ciencias sociales*, 32, (4), 716-737.
- Paramio, L. (1999). Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América Latina. *Zona abierta*, (88-89), 5-74.
- Pardo, M. C. (1992). *La Modernización administrativa en México. Propuesta para explicar los cambios en las estructuras de la administración pública, 1940-1990*. México: Instituto Nacional de Administración Pública-El Colegio de México.
- Pardo, M. C. (1991). *La modernización administrativa en México*. México: INAP-Colegio de México, 1991.
- Peters, G. (2003). *El Nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política*. Barcelona: Gedisa.
- Pietschmann, H. (1996). *Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Prud'homme, J. (2014). *Coyunturas y cambio político*. México: El Colegio de México.
- Puga, C. (Marzo de 2021). La puesta en escena de la cuarta transformación. *Estudios políticos*, (53), pp.13-30. Recuperado de: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/79428>
- Roett, Riordan (1993). La dinámica del cambio en México. En R. Roett (Comp.), *La liberalización económica y política en México* (239-244). México: Siglo XXI.
- Vergara, R. (1997). El Redescubrimiento de las instituciones: de la teoría organizacional a la ciencia política. En J. March y J. Olsen. *El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa de la política* (9-40). México: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública-Fondo de Cultura Económica.